

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/IT/SPEC/Q3/6
16 de octubre de 2002

(02-5582)

Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio
de Productos de Tecnología de la Información

Original: inglés

PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Comunicación de los Estados Unidos

Se ha recibido de la Misión Permanente de los Estados Unidos la siguiente comunicación, de fecha 11 de octubre de 2002.

I. INTRODUCCIÓN

Si bien el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) ha permitido hacer grandes progresos en lo que respecta a la eliminación o reducción de los aranceles aplicados a los productos de tecnología de la información, las empresas estadounidenses de tecnología de la información encuentran aún algunos formidables obstáculos al acceso a los mercados en forma de medidas no arancelarias. De las consultas celebradas con el sector, se desprende claramente que existe una preocupación generalizada por las diversas medidas no arancelarias a las que se enfrenta la industria mundial de tecnología de la información, especialmente en las esferas de la evaluación de la conformidad, el proceso y los procedimientos de reglamentación, las normas, las prescripciones en materia de normas de origen y los procedimientos aduaneros. Estas medidas no arancelarias pueden anular los beneficios del mercado libre del ATI y el objetivo de los participantes en dicho Acuerdo. Aunque en las comunicaciones de los Miembros de la OMC se han señalado diversas medidas no arancelarias, destacan por su dificultad cinco esferas, a las que corresponden también las preocupaciones de las empresas estadounidenses de tecnología de la información y de telecomunicaciones.

II. EXAMEN DE LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y RELACIONADAS CON EL DESARROLLO QUE TIENEN ESAS MEDIDAS EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

A. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

La ausencia de procedimientos armonizados de evaluación de la conformidad, especialmente cuando un único reglamento/norma reconocido internacionalmente es aceptado por cada uno de los países participantes, puede incrementar los costes debido a la duplicación o multiplicación de pruebas y certificados, el retraso de la entrada en el mercado, la incertidumbre e imprevisibilidad en relación con la comunicación con las autoridades responsables de la aprobación, las instituciones de certificación o los laboratorios de otros países. La mayoría de los participantes en el ATI comparten los mismos objetivos de reglamentación con respecto a los productos comprendidos en ese Acuerdo: la protección de la salud y la garantía de la seguridad (principalmente en relación con la seguridad de la energía eléctrica), la compatibilidad electromagnética, la utilización eficiente de los recursos del espectro radioeléctrico y la protección de

la red pública. Existen también normas relativas a la seguridad y la interferencia electromagnética reconocidas internacionalmente para muchos productos de tecnología de la información, (por ejemplo, IEC 60950, CISPR 22 y 24). Muchas administraciones públicas que adoptan reglamentaciones en esas esferas han adoptado esas normas internacionales, y esta armonización internacional ha facilitado considerablemente el comercio. Sin embargo, la proliferación de variaciones en el enfoque de las reglamentaciones en la esfera de la evaluación de la conformidad (pruebas y certificación) está reduciendo considerablemente las ventajas de estas normas internacionales y minando los progresos realizados gracias al ATI para facilitar el comercio de productos de tecnología de la información.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad que son más gravosos de lo necesarios retardan la entrada de los productos en el mercado y en última instancia repercuten en el consumidor, sin ningún beneficio para la salud y la seguridad. La reglamentación mundial de la CEM/IEM aclara este punto y ha sido destacada en varias comunicaciones de los Miembros. En los países que regulan la CEM, las prescripciones reglamentarias para los productos/componentes de tecnología de la información se basan en las normas de la CEI y el CISPR. Sin embargo, hay una gran variedad de enfoques de las prescripciones en materia de evaluación de la conformidad que comprenden desde la declaración de conformidad hecha por el proveedor hasta la certificación de terceros. Dado que se estima que en el caso de los productos de tecnología de la información el riesgo selectivo o la compatibilidad electromagnética es bajo, correspondería a los Miembros del Comité que establece la regulación en esta esfera considerar la revisión de sus reglamentaciones con el fin de garantizar que son realmente apropiadas al riesgo en cuestión, y no socavan el objetivo del ATI en lo que respecta a la facilitación del comercio de productos de tecnología de la información. A tal efecto, apoyamos la propuesta del Canadá de llevar a cabo un proyecto piloto sobre evaluación de la conformidad en materia de IEM/CEM para los productos comprendidos en el ATI.

Cuando las reglamentaciones requieren la presentación de informes de las pruebas realizadas o de pruebas de la certificación, la falta de aceptación de los informes de las pruebas y de la certificación da lugar a procedimientos superfluos de pruebas y certificación que pueden obstaculizar el comercio de productos de tecnología de la información y suponer una carga injustificada para los fabricantes.

B. PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE REGLAMENTACIÓN

Ciertos aspectos de los sistemas y prescripciones reglamentarios deberían considerarse como medidas no arancelarias cuando no son proporcionales a los riesgos que se presentan, no se basan en normas internacionalmente reconocidas ni están justificados por éstas, no se limitan a la protección de objetivos públicos imperativos, establecen prescripciones técnicas detalladas o dificultan la innovación. Todo ello origina costes y demoras en la introducción de los productos en el mercado, sin ningún valor añadido para los consumidores ni para el interés público.

Desde principios del decenio de 1990, muchas administraciones públicas recurren cada vez en mayor medida a reglamentaciones aplicables a los productos de alta tecnología. A consecuencia de ello, la industria de tecnología de la información se enfrenta a diversos aspectos de las reglamentaciones que pueden ser considerados como medidas no arancelarias, entre ellos la falta de transparencia de la reglamentación pública, la multiplicidad de instituciones encargadas de aplicar las reglamentaciones y la deficiente coordinación entre las instituciones de reglamentación. En algunos países, la regulación se centra en las cuestiones relativas al medio ambiente, la sanidad y la seguridad pero se está haciendo también extensiva a la regulación y las prescripciones relativas a productos en función de la privacidad, la seguridad y la compatibilidad electromagnética. Nos preocupa el hecho de que esta reglamentación tiene repercusiones cada vez más importantes en el sector, de las tres formas siguientes:

Costes: El notable aumento de la actividad reguladora de las administraciones públicas impone, en muchos casos, cargas onerosas e innecesarias a las empresas de alta tecnología en detrimento de su capacidad para innovar, proporcionar más opciones al consumidor, mejorar la funcionalidad de sus productos y ofrecerlos a precios asequibles.

Acceso a los mercados: Las reglamentaciones constituyen un obstáculo para las compañías que entran en el mercado internacional y reducen el acceso de los consumidores a la tecnología más avanzada en las economías pequeñas, porque los requisitos de tamaño del mercado fuerzan a los fabricantes de productos de alta tecnología a orientarse a los mercados más grandes con menos obstáculos reglamentarios.

Competitividad: Hay repercusiones en la competitividad para la industria de productos de alta tecnología porque algunas regiones promueven su modelo reglamentario en negociaciones bilaterales en detrimento de las empresas de terceros países. Nos preocupa el mal precedente que sientan estas medidas de reglamentación. Los países pueden tratar de recurrir en mayor grado a la reglamentación de los productos de alta tecnología como forma de proteger sus mercados y adoptar, de forma similar, iniciativas de reglamentación de sus propios productos.

Se ha determinado también que las medidas no arancelarias son el resultado de prescripciones "voluntarias" pero *de facto*, que a menudo se remiten a normas que muchas veces tienen naturaleza cuasi reglamentaria o están patrocinadas por el gobierno o amparadas por normas legislativas. En muchos casos, esas reglamentaciones y el proceso de elaboración de las mismas no ponen de manifiesto el grado necesario de transparencia, responsabilidad, justificación, apertura, imparcialidad, efectividad y coherencia y estructuración técnicas.

C. NORMAS

Respaldamos a las organizaciones internacionales de elaboración de normas y apoyamos la adopción de normas voluntarias reconocidas internacionalmente. No obstante, la elaboración, el contenido y la aplicación de algunas reglamentaciones gubernamentales basadas en normas podrían ser consideradas como medidas no arancelarias. Por ejemplo, pueden utilizarse normas nacionales divergentes no determinadas por el mercado para proteger a la rama de producción nacional y, lo que es más importante, para obligar a los fabricantes a modificar el diseño de sus productos para un mercado específico, lo que constituye un obstáculo al comercio. Como resultado de normas nacionales singulares y de la asignación de frecuencias, los fabricantes se ven obligados a cambiar el diseño de sus productos, y a llevar a cabo pruebas y certificaciones con arreglo a múltiples normas, tienen que hacer frente a las consecuencias del retraso de la entrada en el mercado y soportar la inseguridad en relación con las normas, variantes nacionales, etc., realmente aplicables.

Las normas a que se remiten los reglamentos que exceden las prescripciones de protección básica operan como una medida no arancelaria, que obliga a los fabricante a cambiar sus diseños para un mercado específico y retarda los flujos comerciales de productos de tecnología de la información. La industria ha informado que, en algunos casos, se han elaborado normas voluntarias internacionales para una determinada necesidad del mercado que han sido después adoptadas en una reglamentación. Ello, en sí mismo, puede no ser una medida no arancelaria si, de hecho, satisface una determinada necesidad observada en el mercado. Sin embargo, el problema se plantea cuando otro país adopta la misma norma en forma de reglamentación sin esa necesidad. Como los equipos de tecnología de la información se utilizan cada vez más en los hogares y en los centros de trabajo, algunos países pueden considerar necesaria una mayor regulación de esos productos. Las instituciones de reglamentación deben proceder con prudencia al adoptar normas internacionales basándose únicamente en el hecho de que son internacionales. En lugar de ello,

deberían asegurarse primero de que la norma que eligen es realmente apropiada para lograr el objetivo de la reglamentación.

D. CERTIFICADOS DE ORIGEN

El requisito de certificado de origen es un requisito adicional innecesario de documentación que socava de hecho las ventajas del ATI y, en consecuencia, se ha convertido en una medida no arancelaria importante para el comercio de productos de tecnología de la información y de telecomunicaciones. El requisito de certificado de origen puede ser muy oneroso, ya que obtener la aprobación del certificado de origen del país de envío del exportador puede requerir todo un día (o más, si la entrega debe realizarse durante un fin de semana). Una demora de un solo día puede costar millones de dólares más por concepto de derechos de almacenaje y otros derechos para los productos en espera de ser despachados a su destino final.

La información presentada como parte de la documentación aduanera requerida habitualmente (a saber, una declaración de mercancías y/o una factura) es ya suficiente para proporcionar la información necesaria para registrar el envío y resguardar las leyes sobre ingresos, comercio y aduanas del país importador. Además, el requisito de certificado de origen es muy costoso, especialmente cuando no hay explicaciones del objetivo en que se basa, lo que hace difícil entender su utilidad en el proceso de importación.

E. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Los procedimientos aduaneros tienen el efecto de medidas no arancelarias cuando conllevan trámites engorrosos, no transparentes y excesivamente burocráticos para la obtención del despacho de aduana y/o la autorización de comercialización. El resultado es un aumento de los costos, incluidos los relacionados con los recursos humanos adicionales necesarios para realizar los trámites aduaneros y los costos indirectos relacionados con el tiempo, los retrasos injustificados en las fronteras así como de los costos relacionados con la mayor incertidumbre e imprevisibilidad.

III. VENTAJAS QUE OBTENDRÍAN LOS PARTICIPANTES CON LA ELIMINACIÓN DE LOS EFECTOS INJUSTIFICADOS DE DISTORSIÓN DEL MERCADO

La propia OMC afirma que aunque es difícil dar una estimación precisa de la repercusión en el comercio internacional de la necesidad de cumplir diferentes reglamentaciones y normas técnicas extranjeras, no cabe duda de que ello supone costes importantes para los productores y los exportadores.¹ En tanto que esto es cierto, con las anteriores explicaciones se han identificado prácticas que pueden considerarse medidas no arancelarias para el comercio de productos de tecnología de la información y de telecomunicaciones, que repercuten negativamente en la industria de tecnología de la información y minan los importantes progresos realizados en la facilitación del comercio mediante el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Los diversos estudios enumerados en la compilación de las comunicaciones realizada por la Secretaría, así como las consultas que hemos mantenido con las empresas estadounidenses, corroboran los efectos de estas medidas no arancelarias en el comercio y la necesidad de abordarlas de alguna forma.

En su informe "Global Assessment of Standards Barriers to Trade in the Information Technology Industry" de 1998, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, a través de numerosos ejemplos de la industria, llegó a la conclusión de que las medidas relacionadas con las normas (incluidas las reglamentaciones técnicas, pruebas y certificación) figuraban entre los obstáculos más importantes y costosos al comercio a que debían hacer frente los fabricantes de

¹ http://www.wto.org/spanish/the_wto_s/whatis_s/eol/e/wto03/wto3_4.htm

productos de tecnología de la información.² La industria considera que esta conclusión sigue siendo válida hoy.

Las empresas de tecnología de la información y de telecomunicaciones, que han crecido y madurado desde la aplicación del ATI, han adquirido el carácter de empresas realmente mundiales. Dado que en general las normas técnicas para los productos de tecnología de la información han sido armonizadas mundialmente, los fabricantes tratan de diseñar un producto para el mercado mundial. Sin embargo, los obstáculos que presentan las diferentes reglamentaciones nacionales que aplican esas normas, las prescripciones singulares de prueba y certificación, la no transferibilidad de los datos de la evaluación de conformidad, la prescripción de normas de origen y las onerosas formalidades aduaneras inhiben el comercio y retardan el acceso mundial de los consumidores a la tecnología más avanzada. Es indudable que la eliminación de estos obstáculos facilitaría el comercio de productos comprendidos en el ATI y beneficiaría a los consumidores a nivel mundial, al permitirles el acceso a la tecnología más avanzada a precios asequibles, así como al conjunto de la sociedad, al facilitar el despliegue de la tecnología de la información en una serie de sectores comerciales e industriales, lo que estimularía el crecimiento económico y la productividad.

Constatamos cada vez más las ventajas del uso de la tecnología de información, entre las que cabe citar el importante aumento de productividad y eficacia, los ahorros de costes, el aumento de la competencia, la aceleración de la innovación y de la iniciativa empresarial, la creación de empleos con retribuciones más elevadas y la importante promoción y aceleración del desarrollo económico. Los participantes en el ATI reconocieron estos beneficios y desearon impulsar el comercio de productos de tecnología de la información con el fin de obtenerlos para sus economías. Los Estados Unidos confían en que los beneficios derivados del establecimiento del ATI sean sólo el principio y esperan nuevas oportunidades de fomentar la eliminación de aranceles mediante las adhesiones a la OMC, y las nuevas negociaciones sobre el acceso a los mercados de los productos no agrícolas. Los Estados Unidos alientan también a los participantes en el ATI a que sigan ocupándose de las medidas no arancelarias que están neutralizando cada vez más los beneficios de facilitación del comercio resultantes del ATI y obstaculizar el comercio de los productos de tecnología de la información y de telecomunicaciones.

² Office of Industries, US International Trade Commission, Publication 3141, Noviembre de 1998, p.5-1.